



Movimiento indígena y revolución ciudadana en Ecuador*

*Rickard Lalander***

*Pablo Ospina Peralta****

Resumen

En este artículo se resaltan las relaciones entre el movimiento indígena ecuatoriano y el gobierno progresista de Rafael Correa y su Movimiento PAIS. El objetivo del texto es examinar por qué el movimiento indígena está en la oposición política a pesar de tener varias semejanzas en las agendas políticas iniciales con el gobierno. Para explicar esta paradoja se analiza tanto la reciente historia política del movimiento indígena como las actitudes y las políticas aplicadas por la administración de Rafael Correa. Se ofrecen cinco campos de discrepancia y diferenciación política como probables explicaciones de la relación conflictiva entre las organizaciones indígenas y el gobierno de Rafael Correa. Estos temas interconectados, que buscan explicar el distanciamiento, se desarrollan en el artículo: un dilema intercultural, la oposición al ex-

- * El presente artículo forma parte de un conjunto de artículos, ponencias y conferencias dictados por ambos autores en los que hacen seguimiento a la evolución del movimiento indígena ecuatoriano y a las políticas del gobierno de Rafael Correa. Pablo Ospina viene haciendo desde 2008 análisis de coyuntura política ecuatoriana que han dado lugar a varios artículos, entre los que se encuentran algunos que han servido como fuente de información para este artículo. Asimismo, desde 2007 Rickard Lalander ha analizado el "Efecto Correa" en el movimiento indígena, particularmente a nivel sub-nacional en la Sierra Norte (Lalander, 2010). rickard.lalander@lai.su.se.
- ** Politólogo, Doctor y Catedrático en Estudios Latinoamericanos, investigador y profesor en las universidades de Helsinki y Estocolmo. Investigador asociado de la Universidad Andina Simón Bolívar, Quito. Editor y co-autor de Política y Sociedad en la Venezuela del Chavismo (2006) y ha publicado ampliamente sobre la democracia en los países andinos, inclusive varios artículos sobre el movimiento indígena ecuatoriano.
- *** Historiador, antropólogo y politólogo. Profesor e investigador en la Universidad Andina Simón Bolívar, Quito. Publicaciones más recientes sobre el tema destacan Los Andes en Movimiento: identidad y poder en el nuevo paisaje político (2009) y En las fisuras del poder: movimiento indígena, cambio social y gobiernos locales (2006). pospina@uasb.edu.ec.

Recibido: 8-12-2011 ~ ~ ~ Aceptado: 27-4-2012

tractivismo, las diferencias en cuanto a la apreciación de la movilización social, la política agraria y, finalmente, la política estatal denominada la *dessectorización*.

Palabras clave: Ecuador, Movimiento Indígena, Revolución Ciudadana, Rafael Correa.

The Indigenous Movement and Citizen Revolution in Ecuador

Abstract

This article highlights the relationship between the Ecuadorian indigenous movement and the progressive government of Rafael Correa and his PAIS Movement. The objective is to examine why the indigenous movement has decided to oppose the Correa government, despite initial common political concerns. To explain this paradox, both the recent political history of the indigenous movement as well as the attitudes and politics applied by the Correa administration are analyzed. Five fields of political discrepancy and differentiation are offered as probable explanations for the conflictive relationship between the indigenous organizations and the Correa government. These interconnected themes that seek to explain the distancing are: an intercultural dilemma, opposition to extractivism, different attitudes toward social mobilization, agrarian policies and finally, the state policy called *de-sectorization*.

Key words: Ecuador, indigenous movement, citizen revolution, Rafael Correa.

Introducción

A pesar de las conexiones históricas cercanas entre el socialismo ecuatoriano y las organizaciones indígenas, en la actualidad la mayoría del movimiento indígena se encuentra en oposición política al gobierno de Rafael Correa, instalado en el año 2007, que se reclama partidario del “Socialismo del Siglo XXI”. ¿Por qué no decidieron unirse, considerando que tenían reivindicaciones políticas en común?, el objetivo del presente artículo es identificar algunas raíces de este conflicto y de las tensas relaciones entre el gobierno de Correa y el movimiento indígena ecuatoriano.

A lo largo del todo el siglo XX, se desarrollaron fuertes conexiones entre organizaciones políticas de izquierda y la lucha social de los indígenas. En los años 1920, como lo ha mostrado el prominente historiador Marc Becker (2008), militantes socialistas y comunistas acompañaron

demandas laborales, juicios y conflictos en Cayambe, al norte de Quito, e incorporaron a varios dirigentes indígenas en las estructuras organizativas sindicales. Andrés Guerrero (2010), otro destacado historiador, también ha documentado la presencia de abogados socialistas en Otavalo en las primeras décadas del siglo XX. Es bien conocido que una porción importante de estas redes de relaciones y de vínculos culminaron en la formación de la primera organización indígena con pretensiones de alcance nacional: la Federación Ecuatoriana de Indios (FEI) en 1944. Esta relación se fortaleció durante la década de los años 1960 y 1970 en el contexto de la lucha por la reforma agraria (Velasco, 1979). Esta no es, sin embargo, una tradición o tendencia exclusivamente ecuatoriana; en otros países como Bolivia, Colombia y Venezuela se pueden identificar vínculos históricos y/o recientes entre organizaciones indígenas y partidos o movimientos de la izquierda (Van Cott, 2007).

Estas observaciones históricas hacen comprensible que, a pesar del énfasis más clasista que étnico del discurso de las izquierdas ecuatorianas, su participación en la construcción de uno de los movimientos indígenas más fuertes del continente (Yashar, 2005), cuyo referente organizativo más importante es la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (CONAIE), no pueda ser desconocida. La alianza social que llevó a la conformación del Movimiento de Unidad Plurinacional *Pachakutik* – Nuevo País (PK) en 1996, incluía grupos de izquierda, sindicalistas del sector público y un conjunto muy variado de pequeñas organizaciones ligadas a muy diversos sectores sociales barriales, cristianos de izquierda y organizaciones campesinas. Habitualmente, el movimiento *Pachakutik* se ha considerado el brazo político-electoral del movimiento indígena, y su principal organización, la CONAIE. En el movimiento indígena, la CONAIE ha tenido una posición casi hegemónica, dado que alrededor de 80% de las organizaciones indígenas de base están afiliadas a ella (Van Cott, 2005). Esta fortaleza de la CONAIE ha beneficiado a Pachakutik en sus avances electorales. En comparación, la gran mayoría de los partidos políticos ecuatorianos no tienen ese vínculo estrecho con los movimientos sociales, lo que ha contribuido a la atracción que provocó Pachakutik como aliado político-electoral. Así, PK se constituyó en un movimiento político-electoral abierto a las alianzas estratégicas (interculturales) en diferentes niveles político-territoriales, más allá de la identificación estrictamente étnico-cultural.

No es raro, entonces, que la llegada al gobierno nacional ecuatoriano del economista Rafael Correa Delgado, haya estado precedida por intensas negociaciones que consideraron la posibilidad de una alianza entre PK y el movimiento político de Correa -Movimiento PAIS (Patria Altiva I Soberana)- y su organización más amplia: Alianza PAIS (AP)¹. Rafael Correa, en efecto, forma parte del conjunto de gobiernos llamados “progresistas” que han proliferado en América Latina desde inicios de la década de 2000 y que incluye, además del Ecuador, a los gobiernos de Venezuela, Bolivia, Nicaragua, Brasil, Cuba, Argentina, Uruguay y Paraguay. Esta inicial cercanía de ambos movimientos políticos es, por tanto, perfectamente comprensible dada esta tradicional relación entre la izquierda y las organizaciones indígenas. De hecho, el Partido Socialista Ecuatoriano (PSE), el antiguo apoyo de las primeras organizaciones indígenas del Ecuador, se ha mantenido como uno de los soportes políticos de AP desde que llegó al gobierno en 2007.

Una vez posesionado el nuevo Presidente, en enero de 2007, se dio curso a un proceso constituyente, por el que mediante un referéndum y la elección de asambleístas, se redactó una nueva Carta Constitucional. En septiembre de 2008, se aprobó la nueva Constitución en referéndum con más del 64% de los votos emitidos. Mientras que la Constitución de 1998 definía al Estado ecuatoriano como “pluricultural y multiétnico”, la nueva Carta Magna de 2008 declara que Ecuador es un Estado plurinacional e intercultural, es decir, reconoce y valida las reivindicaciones indígenas que se hicieron públicas desde el levantamiento indígena de 1990. No obstante, hay contradicciones acerca de este reconocimiento. La Revolución Ciudadana de PAIS es un proceso que incluye propuestas que podríamos llamar de dessectorización y/o descorporativización² de la socie-

1 Movimiento PAIS es el movimiento político electoral de una organización más amplia -Alianza PAIS- que por su parte es una coalición de diferentes organizaciones políticas y sociales que promovieron a Rafael Correa a la Presidencia de la República.

2 Los autores conscientemente utilizan el término dessectorización, y no el interrelacionado concepto de descorporativización, que es más frecuentemente usado en el debate ecuatoriano sobre el proceso actual. El acuerdo en PAIS es descorporativizar la sociedad, de manera que los grupos de poder que conformaron corporaciones económicas, sociales, culturales, religiosas y políticas que están presentes en los distintos estratos y sectores sociales, dejen de controlar el Estado a través de esa lógica. PAIS entiende que debe descorporativizar el Estado no solo de grupos empresariales sino

dad, es decir, la abolición de los clivajes sociales, económicos, y, en este caso, étnicos, en la esfera política y, en su lugar, potenciar el ejercicio de la ciudadanía. Progresivamente, luego de la aprobación de la Constitución de 2008, la CONAIE y el gobierno de AP fueron distanciándose políticamente hasta el punto que el día de hoy las organizaciones indígenas, una parte del PSE (la llamada “Corriente Socialista Revolucionaria”) y las principales organizaciones sindicales, se declaran abiertamente en la oposición al gobierno.

Este distanciamiento causa perplejidad fuera de Ecuador. Así por ejemplo, en un reciente texto de entrevistas a dirigentes de Alianza PAIS y de la CONAIE, la socióloga y educadora popular marxista chilena Marta Harnecker (2011) se preguntaba, sin avanzar una respuesta, sobre las razones de la ruptura entre dos organizaciones que parecen buscar fines similares. Por ello, el objetivo en el presente artículo es explorar analíticamente algunas de las principales razones de ese distanciamiento que no ha cesado de ampliarse. El enfoque analítico que se adopta parte de la constatación de que la gran mayoría de los investigadores de las ciencias sociales se ha concentrado en las cuestiones de cómo y por qué las organizaciones indígenas lograron un creciente reconocimiento como ciudadanos y colectivos, así como un creciente empoderamiento como actores políticos, para posteriormente establecerse como autoridad política en diferentes niveles del Estado. Con el auge de reformas constitucionales a partir de los años 1990, varios politólogos, así como sociólogos, y algunos juristas, han entrado en este territorio académico que anteriormente estaba casi hegemonizado por los antropólogos. A partir de entonces, los académicos han prestado atención a la conexión cada vez más profunda entre clivajes sociales y partidos políticos, a la politización de la etnicidad y a la formación de partidos políticos étnicamente definidos (Van Cott, 2005; Yashar, 2005). Esta tendencia indica un proceso hacia una estructura más polifacética de clivajes sociales y culturales detrás de los sistemas de partidos.

también de sindicatos, ONGs, fundaciones, cámaras de producción, asociaciones de mujeres, de jóvenes, de pobladores, entre otros. Esto se considera completamente necesario para revolucionar las estructuras tradicionales porque se identifica que esas corporaciones son soportes del status quo injusto e inequitativo.

Sin embargo, hasta la fecha, los investigadores generalmente han ignorado o subestimado cómo los movimientos indígenas andinos actúan con otros actores políticos no indígenas, este es precisamente el enfoque del presente artículo. Este abordaje supone en primer lugar, que existen diferencias programáticas importantes entre las principales organizaciones indígenas y el gobierno de Alianza PAIS. Se denomina “programático” a las acciones de gobierno (o a la demanda de acciones de gobierno) sobre temas sectoriales (agrarios, mineros, educativos, etc.) y sobre la construcción del Estado que en conjunto indican una orientación política determinada más allá de posibles ambigüedades, fallas o contradicciones. Una definición “programática” implica entonces una cierta coherencia en la acción pública. Esta coherencia puede ser otorgada explícitamente por los propios actores antes de adoptar tales acciones o puede ser el resultado final observado de ellas (desde la opinión del analista o de los otros actores) independientemente de lo que los protagonistas pensaron que estaban haciendo. Estas diferencias “programáticas” se hacen más visibles y agudas conforme hay que transitar desde consignas y referencias generales a las orientaciones programáticas, hacia programas, proyectos y definiciones más precisas de la práctica gubernamental. Pero dichas diferencias programáticas resultan insuficientes para entender el conflicto. Es necesario incorporar, adicionalmente, el análisis de las diferencias que tienen que ver con la gestión política misma, es decir, con el manejo de los balances de poder entre actores, organizaciones y dirigentes del proceso político. El enfoque analítico, por lo tanto, considerará ambas dimensiones: la de los horizontes de sociedad que se plantean los actores y la del balance de poder en un proceso político donde ambos protagonistas no son los únicos actores.

Valga aclarar, en cuanto a la delimitación del estudio, que la ambición no es analizar ni el Socialismo del Siglo XXI, ni la democracia en el Ecuador. El objetivo es más acotado: explicar las tensiones y diferenciaciones en las posturas políticas del movimiento indígena –principalmente de la CONAIE- y del gobierno de Rafael Correa.

El argumento central es que existen cinco temas (o factores) fundamentales e interrelacionados que han obstaculizado las posibilidades de lograr una alianza estable entre los actores del estudio, PAIS-Correa y el movimiento indígena. Algunos de estos desencuentros –de carácter social, cultural, político y económico- existían ya antes de la instalación del

gobierno del Presidente Correa y otros se han profundizado a partir de 2007. Los desencuentros que se destacarán analíticamente son: el dilema intercultural; la oposición al extractivismo; las diferentes concepciones frente a la movilización social; la política agraria; y, la “dessectorización”.

El texto se organiza de la siguiente manera: breve resumen del contexto histórico del movimiento indígena ecuatoriano y el grupo emergente alrededor de Rafael Correa; identificación y discusión de las cinco razones del distanciamiento entre la CONAIE-*Pachakutik* y el gobierno de PAIS. En seguida se reflexionará sobre algunas contradicciones programáticas entre los actores indígenas. Finalmente, el artículo presenta algunas conclusiones y reflexiones finales pertinentes acerca de los desafíos analíticos que se plantearon en la introducción.

1. Contexto histórico

Para comprender mejor el proceso político reciente así como las relaciones entre los actores protagónicos del presente estudio, es importante considerar el papel histórico del movimiento indígena y su actual “crisis” organizativa. En los años 1990 llegó a ser considerado “el más fuerte” del continente desde la perspectiva de su organización (Yashar, 2005)³. El movimiento indígena no solamente ha sido un actor político decisivo en temas de educación bilingüe, desarrollo rural y diseño institucional, sino también ha contribuido al derrocamiento de dos Presidentes -Abdalá Bucaram en 1997 y Jamil Mahuad en el 2000-. Asimismo, hay investigadores que con razón enfatizan el papel que han cumplido los partidos indígenas en el campo del fortalecimiento de la democracia, que impulsan la inclusión de un grupo social tradicionalmente marginalizado, así como un modelo posiblemente más saludable de conexiones partido-sociedad y de relaciones interétnicas (Zamosc, 2007; Van Cott, 2008; Lander, 2010; Rice, 2011).

3 La obra de Yashar se publicó antes de la victoria de Evo Morales en las elecciones presidenciales de Bolivia. Lo que ella quiere mostrar es la fortaleza organizativa del movimiento indígena ecuatoriano y la existencia de una confederación indígena (la CONAIE) de cobertura nacional, con una fuerte base a nivel de las comunidades. Ver también: Van Cott, 2005; Zamosc, 2007, Ospina 2009; Rice, 2011. Para una crítica de esta interpretación de la fortaleza del movimiento indígena ecuatoriano, véase: Baud, 2007.

Las relaciones étnicas ecuatorianas se han transformado radicalmente en los últimos treinta años. Los cambios incluyen redefiniciones de la pertenencia y los criterios de etnicidad, procesos de diferenciación y movilidad social, migraciones internas e internacionales, urbanización y transformaciones socio - profesionales. Estos procesos conllevan, lógicamente, la búsqueda y la re-formulación de la propia identidad indígena, una renovación de las ideas de pertenencia y una redefinición de su posición en la sociedad y ante el mundo (León, 2001; Ospina Peralta, 2009; Lalander, 2010).

En términos políticos, desde la fundación, en 1996, del movimiento *Pachakutik*, las antiguas diferencias sociales, identitarias y políticas tanto dentro del movimiento indígena como con sus aliados urbanos y mestizos, se fueron profundizando y diversificando. En efecto, la politización (y partidización) de la CONAIE ha contribuido a la acentuación de las contradicciones internas por la creación de estructuras y relaciones organizativas complejas entre el movimiento social y el movimiento político (Van Cott, 2005; Zamosc, 2007; Lalander, 2010; Becker, 2011). La participación en el gobierno del coronel Lucio Gutiérrez (2002-2003), aunque duró poco, fue el punto culminante de esas crecientes tensiones internas. Sobre todo, como fruto de esa participación, la imagen política del movimiento indígena como una fuerza política “diferente” y “alternativa”, ante la opinión política nacional, resultó severamente dañada (Lalander, 2010).

Durante sus años de protagonismo político en la oposición a la aplicación del recetario del ajuste neoliberal, las organizaciones populares encabezadas por el movimiento indígena, buscaron darle a la crisis política una salida propia. Esto significó, concretamente, buscar alternativas electorales. Por eso, desde este punto de vista, el periodo que va de 1995 a 2005 puede ser caracterizado como el de un movimiento social en búsqueda de un liderazgo nacional. En la práctica, la amalgama de organizaciones sociales aglutinadas por el movimiento indígena recurrió a figuras poco confiables para sus propósitos de cambio estructural como Freddy Ehlers (candidato presidencial en 1996 y 1998) y Lucio Gutiérrez (candidato presidencial en 2002). Ambos tenían pocas credenciales de una trayectoria política e intelectual comprometida con las causas populares. El primero era un exitoso presentador de televisión, dueño de una productora de programas de reportajes y variedades, cercano a posiciones socialdemócratas, pero sin ninguna historia probada de capacidad de arti-

culación de políticas públicas o de liderazgo en procesos políticos. El segundo, era un coronel que ganó fama en el derrocamiento de Jamil Mahuad acompañando las movilizaciones indígenas de enero de 2000 con una rebelión militar, pero carente de toda precisión en sus posiciones ideológicas, salvo un difuso nacionalismo muy pronto olvidado (Barrera, 2001 y Guerrero Cazar y Ospina Peralta, 2003).

Por su lado, la historia de Rafael Correa Delgado es, en cambio, el recuento de una carrera personal fulgurante⁴. Aunque guayaquileño de origen, luego de sus estudios decidió establecerse en Quito, donde se vinculó a un grupo de economistas, académicos y empresarios que en la capital buscaban construir y difundir propuestas de políticas económicas alternativas a la ortodoxia neoliberal dominante: el “Foro Ecuador Alternativo”. El “Foro” se convirtió en un importante grupo de trabajo bajo cuyo impulso se publicaron varios trabajos académicos, se realizaron diversos seminarios de reflexión y se conquistaron ciertos espacios en los medios de comunicación. Sin embargo, el giro decisivo en la vida de Correa fue su designación como Ministro de Economía en abril de 2005 por el Presidente Alfredo Palacio, luego de la abrupta caída de Lucio Gutiérrez. Correa se rodeó rápidamente de un grupo de colaboradores donde destacaron miembros del “Foro”, unos pocos grupos de izquierda con redes nacionales y algunos amigos personales. Su propósito declarado fue mostrar en una práctica de gestión que “otra política económica era posible”⁵. Poco después de su salida del Ministerio de Economía, impulsado

- 4 Nació en Guayaquil en abril de 1963, en el seno de una familia de clase media. Estudió economía en la Universidad Católica de Guayaquil y estuvo siempre ligado a grupos cristianos, especialmente a la orden de los salesianos, con quienes realizó un año de trabajo misionero en Zumbahua, una de las parroquias indígenas más pobres del páramo de la provincia de Cotopaxi, en la Sierra Central del Ecuador. Allí hizo lo que casi ningún intelectual de clase media, incluso comprometido, ha hecho: aprendió los rudimentos del *kichwa*. Al terminar esta experiencia vital, viajó a Bélgica para estudiar en la Universidad Católica de Lovaina y después prosiguió sus estudios de doctorado en economía en la Universidad de Illinois, también gracias a una beca. A su regreso al Ecuador, el futuro Presidente consiguió un trabajo en la Universidad San Francisco de Quito, institución privada, sumamente costosa, destinada a ofrecer oportunidades de formación superior a los sectores más acomodados de las clases medias y altas del país.
- 5 Durante los tres meses que duró al frente del ministerio no solamente mostró una actitud beligerante ante los organismos internacionales, hizo repetidas declaraciones en contra de la ortodoxia neoliberal y logró la reasignación de prioridades de un fondo

por amigos y colaboradores del “Foro”, se organizaron alrededor de su figura varios grupos políticos y personalidades en lo que más tarde sería el movimiento del gobierno: Movimiento PAÍS⁶.

Ahora bien, es importante destacar que gobiernos anteriores (neoliberales) incorporaron a su gestión a dirigentes del movimiento indígena. Durante la mayoría de gobiernos desde Sixto Durán Ballén en 1992, dirigentes indígenas o figuras indígenas independientes fueron nombrados a distintos cargos públicos. Los casos más notables fueron los de Valerio Grefa (ex-Presidente de la CONFENIAE, la filial amazónica de la CONAIE), nombrado Ministro de Asuntos Étnicos de Abdalá Bucaram en 1997 y Luis Maldonado (ex-dirigente de la CONAIE), como Ministro de Bienestar Social en el gobierno de Gustavo Noboa (2000-2003). En el gobierno de Rafael Correa, sin embargo, los apoyos locales y la presencia de indígenas en puestos gubernamentales, se han multiplicado.

Las sucesivas victorias de Rafael Correa y su Movimiento PAIS en las elecciones presidenciales de 2006 y 2009 han afectado duramente al movimiento indígena ecuatoriano y a sus organizaciones principales. Además, al asumir el gobierno nacional un presidente de etiqueta izquierdista, se modificaron sustancialmente las condiciones de la lucha indígena, de la retórica anti-política y de la resistencia al neoliberalismo. Dentro de *Pachakutik* y la CONAIE, a nivel nacional, también repercute este nuevo escenario político realineando las posiciones de las facciones del movimiento: unas prefieren desarrollar un proyecto político de oposición al gobierno mientras que ciertos grupos o miembros destacados de la dirigencia se han integrado decididamente en el gobierno.

Desde su salida del Ministerio de Economía, quedó claro que Rafael Correa era definitivamente una figura con potencialidad política para crecer. Los hechos posteriores lo confirmaron. Pero una figura no alcanza para manejar el Estado ni para conducirlo. Necesitaba un aparato polí-

formado por los excedentes petroleros, sino que mostró claramente sus cualidades de liderazgo y su carisma personal tanto para las sensibilidades políticas costeñas como para las serranas.

6 Varias reseñas pueden encontrarse de estos acontecimientos, se remite al lector a las entrevistas compiladas por Marta Harnecker (2011) y al libro de uno de los fundadores de PAIS, Gustavo Larrea (2009).

tico, un movimiento. De esto resulta una curiosa convergencia. Por un lado, los movimientos sociales ecuatorianos (sobre todo el movimiento indígena) pugnaron durante una década por conseguir la adhesión de un liderazgo político-electoral que contribuyera a consolidar las conquistas de sus constantes esfuerzos de movilización social contra el neoliberalismo. Poco tiempo después, Rafael Correa se consolidó como una figura con simpatías nacionales, crítica al modelo neoliberal y que necesitaba un movimiento de soporte político. Parecían necesidades complementarias. Todo parecía presagiar un acuerdo posible y mutuamente conveniente. Hubo posibilidades de un acuerdo electoral en los momentos previos a la inscripción de candidaturas. No ocurrió. ¿Qué factores lo impidieron?, en las siguientes secciones – a través del enfoque analítico en los cinco factores de desencuentro – se busca explicar las razones que llevaron a que esa cercanía inicial que estuvo a punto de significar una alianza electoral entre el movimiento indígena y PAIS fuera convirtiéndose progresivamente en una oposición abierta.

2. Dilema intercultural

Como se planteó en la introducción, cinco temas de fondo distancian a los movimientos sociales organizados del gobierno de Correa y ninguno de ellos tiene que ver directamente con el discurso confrontador y descalificador del Presidente. Esto no quiere decir, por supuesto, que diferentes estilos de liderazgo no contribuyan a las tensiones entre el gobierno de Correa y el movimiento indígena, pero eso es secundario. El primer punto de contrastes se encuentra en los desafíos del movimiento indígena asociados a la necesidad de crear alianzas políticas más allá de la definición étnica. En esta sección se reflexiona sobre estos retos socio-político y culturales en términos de un dilema intercultural que debe afrontar el movimiento indígena. La argumentación sobre este factor igualmente funciona como “antecedente” de las discrepancias posteriores que se fueron profundizando después de la instalación de Rafael Correa en la presidencia. Para comprender mejor estos desafíos políticos del movimiento indígena, es importante considerar aspectos fundamentales de organización y política de alianzas.

Se entiende por “dilema intercultural” el hecho que la principal organización indígena, la CONAIE, asienta su cohesión interna en una iden-

tividad étnico-cultural, es decir, una identidad que se basa en la distinción y separación entre un “nosotros” indígena y un “ellos” blanco – mestizo. Al mismo tiempo, ha optado, por razones históricas y políticas que no es del caso detallar aquí, por construir alianzas con diferentes grupos de blanco - mestizos de quienes, precisamente, debe diferenciarse. Eso se puede interpretar como una tensión entre la política de reforzar la identidad propia y la política de alianzas. Otra manera de plantearlo, es que existe una contradicción entre el carácter oficialmente intercultural y pluriétnico de *Pachakutik* (constituido en alianza con otros grupos socio-políticos), y la CONAIE, que es una organización pluricultural exclusivamente indígena. Es esta tensión socio-política y cultural a la que se conceptualiza como el “dilema intercultural” (Lalander, 2010).

Así comprendido, el dilema intercultural tiene un carácter distinto al de los siguientes cuatro temas de distanciamiento porque no es una diferencia “programática” como las demás, sino que alude a la estrategia general, histórica, del movimiento indígena, a la forma en que esta tensión se manejó en el pasado, y a las presiones a las que se ve sometida por el gobierno de Rafael Correa. El movimiento indígena ecuatoriano no puede ser entendido como un actor unido y sólido sino como un agregado variado y complejo de tendencias internas. No importa cuán tensa o relativamente suave sea la relación entre el gobierno y las organizaciones indígenas, siempre habrá dentro del movimiento indígena varias orientaciones diferentes respecto de la política de alianzas o respecto de la agenda programática.

Lo primero que debe decirse es que, tal como se conceptualizó, el dilema intercultural ha acompañado al movimiento indígena desde su misma emergencia como el principal movimiento social del Ecuador en la década de 1990. En ese tiempo, sin embargo, la CONAIE pudo convertirse en el polo de atracción de una gran variedad de organizaciones políticas y sociales de izquierda, de mayoría blanco–mestiza, que se oponían a la aplicación del paquete de medidas neoliberales. Por lo tanto, se debe explicar por qué el dilema intercultural, que pudo ser manejado y controlado hasta el año 2005 de manera que las alianzas se sostuvieron y multiplicaron, luego de 2006, por el contrario, pareció reforzar las distancias con el gobierno de Rafael Correa, que, sin embargo, también se oponía al neoliberalismo. Para explicar esta paradoja se muestran las dificultades programáticas y organizativas que supone el dilema intercultural en el

seno movimiento indígena ecuatoriano; luego se muestra que a pesar de él, hubo muchas posibilidades iniciales de una alianza entre AP y PK; y se señalan las razones por las cuales esta alianza finalmente no se concretó y se reforzaron las discrepancias programáticas con el gobierno de la Revolución Ciudadana.

Una de los más importantes desafíos que trae aparejado el “dilema intercultural” para el movimiento indígena es la gran variedad y hasta dispersión ideológica de la CONAIE. Su principal vector de unidad es étnico-cultural, antes que programático. Esto fragiliza las alianzas ideológicas con sectores blanco-mestizos una vez que se abandona el terreno específico de la discriminación o la dominación racial. El dirigente Luis Maldonado⁷ llama la atención sobre este aspecto del problema de las alianzas políticas y la dificultad de articular un programa o proyecto político:

Por eso es que la representación de *Pachakutik* primero no es de un programa político, sino de una alianza de diferentes sectores sociales, que lo que se plantea es dar una alternativa política, electoral al país, frente a una coyuntura. Luego es que se va pensando cuál es su doctrina, su propuesta política de largo plazo etc., etc. Y creo que no hemos logrado construir líneas claras en ese aspecto. Las alianzas han sido siempre complicadas, difíciles (Maldonado, entrevistado por Lalandier, Ibarra, 7 de julio 2007).

No obstante esta persistente dificultad, la antigua tradición de cercanía entre las organizaciones ideológicas de izquierdas y las organizaciones indígenas siguieron operando, sobre todo en la sierra. No hay que olvidar que fueron ellas, las más importantes organizaciones indígenas serranas, las que pugnaron en el año 1995 por hacer de PK un movimiento intercultural, mientras que el grueso de las organizaciones indígenas amazónicas buscaron formar un partido exclusivamente indígena (Barrera, 2001; Guerrero y Ospina, 2003). En tal contexto, se entiende que el apareamiento de una figura izquierdista como Rafael Correa generara inicialmente muchas simpatías entre las organizaciones indígenas y que se hicieran importantes acercamientos.

7 Luis Maldonado es, junto a Luis Macas, otro de los principales intelectuales del movimiento indígena ecuatoriano. Fue Ministro de Bienestar Social en el gobierno interino de Gustavo Noboa (2000-2003).

Antes de que PK oficializara la candidatura de su histórico dirigente, Luis Macas, PAIS buscó establecer una unidad electoral con *Pachakutik*. En palabras de Ricardo Patiño, dirigente político cercano a Rafael Correa:

Entonces, vino la pregunta: “¿Cómo lo hacemos? Hagamos una alianza con *Pachakutik*, con el movimiento indígena”. Aunque este movimiento había irrumpido con mucha fuerza en la década del 90, *Pachakutik* no tenía una votación muy caudalosa en ese momento. Nosotros sabíamos que no iba a darnos muchos votos, pero sí iba a dejar claro hacia dónde íbamos y con quién estábamos. Rafael decía: “Que quede claro que estamos con los excluidos y la representación política de ellos más clara, más evidente, más natural, es *Pachakutik* (Patiño entrevistado en Harnecker, 2010: 20).

En realidad, el Movimiento PAIS y Correa ofrecieron la vice-presidencia, a título personal, es decir, sin mediar acuerdo político – organizativo alguno, tanto a Auki Tituaña (alcalde Kichwa de Cotacachi) como a Macas, pero ambos rechazaron la oferta. Algunos dirigentes de la CONAIE y de *Pachakutik*, serranos y amazónicos, criticaron este rechazo porque en su opinión perdieron una oportunidad para alcanzar el gobierno nacional a través de esa alianza. PAIS y *Pachakutik*-CONAIE tenían agendas políticas muy semejantes, como las demandas por un proceso constituyente, rechazo al Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos y a la presencia militar estadounidense en Manta, así como otras propuestas relacionadas al desarrollo y temas ambientales (Becker, 2011). Por ello, antes de inscribir las candidaturas de 2006, algunos dirigentes y grupos del movimiento indígena apoyaron a Correa. Como destaca el ex-coordinador nacional de *Pachakutik*, Gilberto Talahua, ECUARUNARI⁸ se opuso y decidió hacer campaña en solitario con Luis Macas: “Fue [una candidatura] impuesta por la dirigencia del movimiento indígena, desconectada del sentir de las bases que pedían la alianza y que se reflejó en los resultados electorales” (El Universo, 26 de octubre 2007)⁹.

8 ECUARUNARI (*Ecuador Runacunapac Riccharimuñ*) se fundó en 1972 y el nombre significa “el despertar de los indígenas ecuatorianos”. ECUARUNARI fue un actor principal tras la fundación de CONAIE en 1986. Es la representación de la Sierra ecuatoriana dentro de la CONAIE.

9 Artículo: “Salvador Quishpe es el nuevo coordinador de *Pachakutik*”.

Mónica Chuji, representante Kichwa-amazónica de la CONAIE, recuerda la coincidencia entre la agenda del movimiento indígena y las propuestas de PAIS durante la campaña del 2006. Aunque Chuji apoyó a Luis Macas en la campaña de 2006, posteriormente se incorporó en la propuesta política liderada por Alianza PAIS, primero como secretaria de comunicación y luego como asambleísta constituyente:

...En la primera vuelta yo voté por Luis Macas, ellos son muy coherentes con la línea de la CONAIE, pero ya en la segunda vuelta obviamente apoyé a Rafael Correa, como la gran mayoría de *Pachakutik*, por supuesto. Desde luego, entonces, en este escenario es que a mí [Correa] me invita a tomar parte de su gabinete y yo le acompaño durante seis meses en la secretaría de comunicación. Luego yo renuncié, paso a la Asamblea [Constituyente] dentro de la lista de Alianza PAIS. Y en ese momento Alianza PAIS se constituye con otros actores, es decir, organizaciones indígenas como la FENOCIN, otras organizaciones como Ruptura 25, Alternativa Democrática, Foro Urbano, que son grupitos que se formaron, así de ex *Pachakutik*, me refiero a [Augusto] Barrera, me refiero a [Virgilio] Hernández, y la misma cúpula de Alianza PAIS. Me presento allí como alguien de la CONAIE, no afiliada a Alianza PAIS, pero sí coincidiendo con una propuesta, una economía pos-petrolera, una economía más ecologista por llamarlo así, como el caso del Alberto Acosta, por ejemplo, con el que me había conocido hace muchos años también (Chuji, entrevistada por Lalander, Quito, 30 de junio, 2009).

Se nota que la Ecuarrunari, filial serrana de la CONAIE, históricamente ligada a grupos de izquierda, se opuso a la alianza mientras que dirigentes amazónicos, tradicionalmente más alejados de las ideologías de izquierda, buscaron la alianza, sin olvidar que en 1995, cuando se formó PK, el grueso de las organizaciones serranas pugnó por construir un aparato político intercultural mientras que el grueso de las organizaciones amazónicas buscaba un partido estrictamente indígena (Barrera, 2001; Guerrero y Ospina, 2003). Este cambio radical en la política de alianzas en 2006, muestra que las razones del fracaso de la búsqueda de una fórmula electoral conjunta deben buscarse en el momento y en las condiciones de la alianza y no tanto en el carácter más “étnico” o más “ideológico” de la CONAIE. En efecto, contra una posible fórmula electoral conjunta conspiraron factores presentes en ambos bandos. Del lado indígena, el

factor inmediato más importante fue la lectura pesimista de los saldos de la constante búsqueda de una figura “externa”. ¿Qué garantizaría que este nuevo aliado no actuaría como aliados anteriores?, la lectura pesimista de las alianzas provenía no solo de la desastrosa experiencia con Lucio Gutiérrez, sino de la convivencia más prolongada con otros grupos de mestizos de izquierda en el movimiento electoral *Pachakutik* (Becker, 2011). La raíz del desencuentro consistía en que la CONAIE siempre dispuso de una alta capacidad de movilización organizada mientras que sus aliados mestizos, urbanos y de izquierda no la tenían, careciendo entonces ante las organizaciones indígenas del cimiento de su autoridad y legitimidad políticas. El aporte de estos grupos venía de su destreza en la construcción de propuestas técnicas, su habilidad en la elaboración de discursos políticos, su capacidad de gestión administrativa del Estado, su lectura de las oportunidades que ofrecía la coyuntura. En síntesis, las tareas técnico-políticas esenciales para las que el movimiento indígena carecía de cuadros propios suficientes¹⁰.

Cuando Rafael Correa y su equipo llegaron a la escena, esos conflictos habían llegado a un punto de quiebre por los resultados adversos de la alianza con Lucio Gutiérrez. Era muy difícil tomar contacto e iniciar negociaciones en un contexto tan “minado” como el que encontraron. Por su parte, el equipo político de Rafael Correa también tendía a distanciarse de las organizaciones indígenas por dos razones. La primera es que el desprestigio del sistema político y de los partidos se extendía a toda forma organizativa de la política, incluyendo al movimiento indígena, cuyo prestigio social se había resentido por el apoyo al triunfo electoral de Lucio Gutiérrez. En esa perspectiva, para los dirigentes de la Revolución Ciudadana, el tiempo del movimiento indígena como polo de gravitación de las fuerzas sociales opuestas al ajuste ya había pasado. Si en los noventa fueron importantes, luego de la “rebelión forajida”, que eludiendo toda organización formal había bastado para desalojar a Lucio Gutiérrez

10 No se trata, por supuesto, de un problema solamente “ecuatoriano”. La provisión de intelectuales suficientes para hacer frente a las responsabilidades institucionales es un problema central de todos los movimientos sociales que se vinculan con la lucha político – electoral. Para una lectura de este tema en el caso boliviano, véase: Do Alto, 2007, y para una discusión de este problema en el caso del movimiento indígena ecuatoriano: Guerrero Cazar y Ospina Peralta (2003, capítulos 5 y 6).

del sillón presidencial, parecía que el tiempo de las organizaciones como fuentes de convocatoria y representación legítima había terminado¹¹. La segunda razón es más doctrinaria, aunque su base sigue siendo el cálculo político. En opinión de varios estrategas e ideólogos de Acuerdo País, en el movimiento indígena, así como en prácticamente todas las organizaciones populares y sindicales, predomina una visión particularista y “corporativa” de la política y el Estado (Bustamante, 2006; Larrea, 2009). De ahí su insistencia en apelar al discurso “ciudadano”.

En síntesis, por una combinación de desencuentros ocasionados por distintas prioridades electorales, por historias políticas cronológicamente desencajadas y por subyacentes diferencias doctrinarias, la confluencia entre el mayor movimiento social actualmente existente en el país y el mayor liderazgo político de izquierdas que haya conocido la historia nacional, no pudo hacerse realidad. Con el paso del tiempo la distancia ha tendido a hacerse cada vez mayor entre los sectores sociales organizados y el gobierno de la Revolución Ciudadana. ¿Por qué?

Tanto la variedad interna como la dispersión ideológica que se ha asociado al “dilema intercultural” pudieron controlarse en la época de la resistencia al neoliberalismo pero se volvieron de manejo más difícil cuando se volvió necesario precisar un programa positivo de gobierno. La historia de las décadas de 1986 a 2006 muestra que una alianza política sistemática entre grupos de izquierda y la CONAIE era perfectamente posible a pesar de la persistente e histórica dificultad del movimiento indígena para hacer alianzas por esta variedad interna y por la indefinición ideológica que acarrea necesariamente la “política de la identidad” cuando se aplica a terrenos distintos a la discriminación étnica o la dominación racial. Ocurría, además, que los grupos de izquierda en los años 1990 eran más débiles por comparación con la capacidad de movilización y el despliegue organizativo de la CONAIE. Por ello, fueron más flexibles para adaptarse a esa variedad de las organizaciones indígenas y pudieron hacerlo también

11 Recientemente se han publicado entrevistas de dirigentes de Alianza PAIS que reafirman este diagnóstico. Ver, por ejemplo, las afirmaciones de Eduardo Paredes y Ricardo Patiño, en Harnecker, 2011: 97-99 (las páginas pueden variar porque se ha usado una versión digital anterior a esta publicación en Madrid). La versión más completa de esta posición, que considera que la importancia de las organizaciones sociales en general es menor en los procesos actuales de cambio, puede encontrarse en Larrea, 2009.

porque no requerían definiciones programáticas muy precisas. Con el gobierno de Rafael Correa esas condiciones se invirtieron. Conforme crecía su poder personal, se volvió cada vez menos dispuesto a aceptar ambigüedades o transacciones en temas de política de gobierno. Las definiciones programáticas de su gobierno se fueron alejando cada vez más de aquellas que había venido construyendo el movimiento indígena en su historia reciente. La distancia no podía sino seguir creciendo.

3. Oposición al extractivismo

El segundo tema de desencuentro de fondo es el desarrollismo extractivista en los planes económicos del gobierno. La mayoría de las organizaciones no pide la suspensión inmediata de la explotación petrolera ni la abolición de toda minería. Exigen que el extractivismo tradicional no sea reforzado con un nuevo extractivismo minero que solo empeoraría las cosas y que contradice el propósito enunciado por el *Plan del Buen Vivir* (SENPLADES, 2009) de ir hacia una sociedad de servicios basados en el bio-conocimiento y el turismo.

En efecto, la Constitución ecuatoriana de 2008 (igual que la boliviana) considera que el objetivo del régimen de desarrollo no es el crecimiento económico o el bienestar sino el *Sumak Kawsay*, definido de la siguiente manera en el artículo 275:

El régimen de desarrollo es el conjunto organizado, sostenible y dinámico de los sistemas económicos, políticos, socio-culturales y ambientales, que garantizan la realización del buen vivir, del *Sumak Kawsay* (...). El buen vivir requerirá que las personas, comunidades, pueblos y nacionalidades gocen efectivamente de sus derechos, y ejerzan responsabilidades en el marco de la interculturalidad, del respeto a sus diversidades, y de la convivencia armónica con la naturaleza.

Las nuevas constituciones de Bolivia (2009) y Ecuador (2008) han sido consideradas como los textos constitucionales más radicales del mundo con respecto a la provisión de protección legal de la naturaleza. En el caso ecuatoriano se llega incluso a considerarla como sujeto de derechos. En los movimientos indígenas de Bolivia y Ecuador, los elementos identitarios de etnicidad, prácticas culturales, territorialidad y medio ambiente están íntima y complejamente integrados. En ambos paí-

ses, el principio indígena del *Sumak Kawsay* (buen vivir/vivir bien) está establecido constitucionalmente. Bolivia y Ecuador tienen algunos de los biosistemas más ricos del mundo, los cuales están amenazados por la contaminación y deforestación provocadas por la extracción industrial de recursos naturales. Así que, en la práctica, poderosos intereses económicos y políticos chocan con los derechos indígenas y ambientales en el contexto de la nacionalización de industrias vitales (principalmente hidrocarburos y minería).

Es muy importante enfatizar el valor estratégico y simbólico en la aplicación de los símbolos del movimiento indígena – *Sumak Kawsay* y *el Buen vivir*– que el gobierno de Correa-PAIS ha incorporado e institucionalizado como *sus políticas y principios*, neutralizando de esta manera al grupo opositor indígena y buscando legitimidad para su política desarrollista. Los más conocidos ejemplos del *desarrollismo* gubernamental son la política de promoción de la minería y la política agraria, sostenida durante los dos primeros años de gestión, ambos resaltan la completa subordinación de las consideraciones ambientales al crecimiento económico y buscan reforzar la posición de grandes grupos económicos nacionales, sobre todo aquellos principalmente volcados al mercado interno (Ospina Peralta, 2008; 2009). Como diría Marlon Santi, ex-Presidente de la CONAIE (2008-2011):

El desarrollo que plantean desde el gobierno nacional está sujeto a un desarrollo agresivo, a un desarrollo sin ver a la madre tierra como un espacio de vida o como un espacio que genera vida; entonces es ahí donde que rompemos y entramos a conjugar dos posiciones, nosotros un desarrollo alternativo, progresista que respete los derechos ambientales, los derechos humanos, los derechos de la naturaleza; y el gobierno o el poder económico. ¿No? Entonces en las actuales circunstancias, el modelo de desarrollo es el que no entiende al modelo de la vida que el movimiento indígena plantea (Santi, entrevistado por Lalander, Riobamba, 2 de julio de 2009).

Otro rasgo propio del desarrollismo clásico que se reproduce en la Revolución Ciudadana es el papel protagónico del Estado y sus inversiones en la dirección y el impulso al crecimiento económico. La aprobación de la Ley Orgánica de Empresas Públicas que entró en vigencia a fines de septiembre de 2009 y todas las disposiciones constitucionales que refuerzan el papel exclusivo del Estado en las áreas estratégicas de la eco-

nomía, son evidencias de este rasgo. Aunque ese reforzamiento no es el que genera mayores desencuentros, sí lo es el de las reivindicaciones de ecologistas e indígenas respecto a la explotación petrolera y minera, sobre los que Rafael Correa lanzó serias advertencias públicas a la Asamblea Nacional Constituyente. Renunciaría antes de aceptar limitaciones en la promoción de estas actividades:

Por otro lado, siempre hemos dicho que uno de los mayores peligros es el izquierdismo y ecologismo infantil. Como ya se expresó anteriormente, una postura insensata de moratorias petroleras, prohibición de explotación petrolífera en parques nacionales —cuando todo el país debería ser parque nacional— o la prohibición de la minería abierta sin beneficio de inventario, sólo podría interpretarse con las mismas palabras con que el genial Simón Bolívar, en su manifiesto de Cartagena [1812], explicó el desmoronamiento de la Caracas independiente: «Los códigos que consultaban nuestros magistrados no eran los que podían enseñarles la ciencia práctica del gobierno, sino los que han formado ciertos buenos visionarios... Por manera que tuvimos filósofos por jefes; filantropía por legislación; dialéctica por táctica; sofistas por soldados». En todo caso, de aprobarse este tipo de cosas, las respetaré como el que más, pero sí les solicitaré encarecidamente que acepten mi renuncia, ya que probablemente alguien con más talento podrá dirigir el país en esas condiciones, pero, sencillamente, el suscrito no (Correa, 2007).¹²

La posición de principio que tiene el Presidente ante la explotación minera - una posición muy cercana al “desarrollismo” del período previo a la toma de conciencia sobre la crisis ambiental contemporánea - choca con el creciente movimiento social de oposición de las poblaciones y comunidades rurales afectadas por sus estragos.

12 Discurso del Presidente Rafael Correa, en la ceremonia de inauguración de la Asamblea Nacional Constituyente, 30 de noviembre, 2007.

4. Movilización social

El tercer factor que ha reforzado el distanciamiento entre el gobierno y la CONAIE es la decidida hostilidad del ejecutivo a la movilización social independiente. No es solo un discurso agresivo. Son no menos de 204 enjuiciados por participar en protestas, 170 de ellos con juicios penales y en 12 de los 31 procesos penales, la acusación es terrorismo y sabotaje¹³. La función de esa judicialización de la protesta social es evitar nuevas movilizaciones porque, como dijo el Presidente en la entrevista de Marta Harnecker (2011: 227-228), no hay que confundir autoritarismo con “principio de autoridad”. Los pesados juicios a los dirigentes, algunos de los cuales han terminado con sentencias acusatorias, disuaden mediante el miedo la participación en acciones de protesta. Uno de los más recientes arrestos es el de Marco Guatemal, Presidente de la federación departamental de la Sierra Norte de la CONAIE, acusado de terrorismo, por haber conducido una manifestación callejera contra el gobierno en la ciudad de Otavalo en 2009. Sin embargo, fue liberado como resultado de la presión, las movilizaciones callejeras de las organizaciones indígenas y las críticas en los medios de comunicación.

Hay algo meridianamente claro en la concepción del Presidente: para realizar la participación ciudadana no es lícito tomarse la calle. Es tajante el rechazo gubernamental a las manifestaciones, levantamientos y huelgas. Más allá de las declaraciones constantes del Presidente contra las manifestaciones en la calle (señal de anarquía y no de democracia), lo más llamativo ha sido sin duda el recurso sistemático a la acusación de terrorismo y sabotaje contra quienes obstaculizan las vías públicas. Diversas estimaciones calculan que entre 2008 y 2010 se ha procesado a cerca de 200 personas con esa acusación basada en el artículo 160, numeral 1, del Código Penal aprobado por la dictadura de 1964 en el marco de la doctrina de seguridad nacional¹⁴. Tanto el Presidente como sus Minis-

13 Los datos refieren a la última valoración disponible sobre criminalización de la protesta social entre los años 2008 y 2010 (Acción Ecológica, CEDHU e INREDH, 2011).

14 Vale destacar que la tipificación de “terrorismo” en el código penal ecuatoriano usa tres “etcéteras” en un mismo artículo para definir el concepto, que probablemente sorprenderá a cualquier abogado medianamente preocupado por los derechos huma-

tros han justificado el recurso a esta figura desproporcionada contra toda manifestación callejera de oposición, diciendo que es la única figura prevista en la legislación ecuatoriana:

Y cuando frente al secuestro de maquinaria, cierre de caminos, secuestro de personas etc., como corresponde en un Estado de derecho, se quiere aplicar la ley, nos quedamos en la forma: se ha acusado de sabotaje y terrorismo, porque así llama nuestro Código Penal a esos delitos. Y por un nombre impreciso, pretendemos dejar todo en la impunidad. ¿Es ese país en el que queremos vivir? (Correa, 2010).

El argumento puede considerarse insólito. Es evidente que la legislación ecuatoriana tiene otras figuras legales más proporcionales al tipo de delito que se achaca a los manifestantes¹⁵. La protesta callejera no está considerada en las leyes ecuatorianas como un delito lo suficientemente execrable y grave como el Presidente piensa. Para el Presidente, la movilización social no es, como sí lo es para el movimiento indígena y para todos los movimientos populares organizados del país, un mecanismo legítimo de la democracia:

Eso me rebela grandemente, porque no hemos entendido lo que es la cultura democrática. Señores, los que ganamos las elecciones somos nosotros, no su grupo que obtuvo menos del

nos: “quienes individualmente o formando asociaciones, (...) armados o no, pretextando fines patrióticos, sociales, económicos, políticos, religiosos, revolucionarios, reivindicatorios proselitistas, raciales, localistas, regionales, etc., cometieren delitos contra la seguridad común de las personas o de grupos humanos de cualquiera clase o de sus bienes:....y a quienes construyeran barricadas, parapetos, trincheras, obstáculos, etcétera, con el propósito de hacer frente a la fuerza pública en respaldo de sus intenciones, planes, tesis o proclamas” (citado por Acosta, 2011).

- 15 Tan consciente es el gobierno de que otras figuras existen, que ya en julio de 2010 remitió a la Asamblea Nacional un proyecto de reformas legales que prevé el aumento de prisión de hasta tres años a quienes cierran las vías públicas equiparando la pena a la de tortura (CEDHU y Acción Ecológica, 2010). La propuesta de reforma integral al Código Penal presentado por el gobierno de Rafael Correa en octubre de 2011 mantiene dicha propuesta: cf. Proyecto de Ley Código Orgánico Penal Integral, En: <http://documentacion.asambleanacional.gov.ec/alfresco/d/d/workspace/SpacesStore/233c7e51-a5a7-4c0e-a848-79e6ead28a9c/Ley%20del%20C%C3%B3digo%20Org%C3%A1nico%20Integral%20Penal>.

2% de la votación. Pero, a la brava quiere imponer sus políticas... (Correa, 2008b)¹⁶.

Ahora bien, la propuesta de su gobierno para la selección de “representantes ciudadanos”, en lugar de representantes de organizaciones sociales, nos da una pista de su idea de democracia. El elemento crucial de su propuesta es la selección basada en méritos individuales, posgrados y exámenes. Rafael Correa contrapone explícitamente este criterio meritocrático al de participación en la lucha social:

Por elemental responsabilidad no puedo creer en novelorías tales como que en determinados concursos aquellos que se auto proclamen miembros de minorías sexuales tengan puntos adicionales, o que para conformar el Consejo de Participación Ciudadana, con todo respeto a los miembros, el tirapiédras que empezó a los quince años tiene puntos adicionales y el abanderado no, [aplausos]... sacrificándose lo esencial, la meritocracia... (Correa, 2010).

5. Política agraria

El cuarto factor de distanciamiento con el grueso del movimiento indígena es una política agraria que a lo largo de estos casi cinco años ha reafirmado en esencia los mismos sesgos de todos los gobiernos anteriores. No se refiere aquí al “desarrollismo” de la política agraria convencional mencionada anteriormente, sino el fracaso de la anunciada política redistributiva de tierras y aguas. En efecto, por un breve período, el gobierno se propuso cumplir la promesa de campaña de redistribuir tierras pero no avanzó en ello ni un solo milímetro, y el nuevo ministro nombrado en el año 2011 simplemente dejó de hablar del tema.

Según el Plan del Buen Vivir, una política de redistribución de agua y tierras es esencial para el cambio del modelo de acumulación y para el éxito de la estrategia nacional en general. Es el énfasis principal de los cuatro primeros años. Al menos, así está expresado en los documentos oficiales:

16 Cadena radial, emisora Zaruma, sábado, 26 de abril de 2008.

La primera fase es de transición en términos de acumulación en el sentido de dependencia de los bienes primarios para sostener la economía; no así, en términos de re-distribución, considerada como el centro del cambio en este período y en general de la estrategia en su conjunto...El Gobierno Nacional se ha planteado el reto de impulsar un proceso sostenido de democratización de los medios de producción con especial énfasis en la tierra, el agua y los activos productivos que no cumplen su función social... La presente estrategia tiene un particular énfasis en el sector agropecuario, en el que los efectos de las políticas neoliberales fueron extremadamente nocivas al intensificar la concentración de tierra y agua en pocas manos; extender el minifundio; aniquilar la institucionalidad pública y el rol regulador y redistribuidor del Estado; asfixiar a las pequeñas economías campesinas al punto de expulsar a los pequeños productores campesinos de su tierra y convertirlos en migrantes o asalariados; y promover una polarización creciente entre campo y ciudad (SENPLADES, 2009: 96, 101-102).

Es mérito incuestionable del gobierno haber señalado la necesidad y la deseabilidad de la distribución de la tierra y el agua, algo que prácticamente ningún gobierno de los pasados treinta años había vuelto a mencionar. Fuera del mérito discursivo innegable, no hubo nada nuevo. De las tierras del Estado que debían entregarse hasta fines de diciembre de 2011, para febrero habían sido entregadas 2881 hectáreas, 2000 de las cuales correspondían a un predio de propiedad comunal; es decir, muy pocas tierras estatales. Ninguna propiedad provenía de las incautaciones a los bancos que entraron en crisis a fines de siglo (Landívar y Yulán, 2011). Una reciente evaluación del intento de entregar a cuatro organizaciones de campesinos de la Costa algunas propiedades rurales de buena calidad que quedaron en manos del Estado por efectos del rescate de bancos en crisis, muestra que la maraña legal y judicial que impide la resolución de los conflictos entre el Estado y los banqueros se combina con complicaciones provocadas por la presencia de traficantes de tierras llenos de expectativas por las propiedades a ser entregadas y de grupos armados en manos de los antiguos dueños (Landívar y Yulán, 2011).

En una muy reciente comparecencia pública, al comentar la propuesta de ley de tierras de las organizaciones campesinas, el Presidente Correa contrapuso precisamente la política de redistribución de tierras a

la política de promoción de la producción desconociendo el potencial productivo que tiene la pequeña producción agropecuaria:

Algunos quieren definir latifundio de acuerdo a un tamaño: más de 100 hectáreas y ¡prohibido los latifundios, la Constitución prohíbe el latifundio...! [Pero] lo importante es la propiedad y lo importante que se esté produciendo... Primera idea de fuerza: cuidado por hacer un bien hacemos un daño mayor... Para que todos seamos propietarios partamos estas 2000 hectáreas en 1.000 familias a dos hectáreas cada familia. Bueno, vamos a tener 2000 familias más pobre que antes. La segunda idea de fuerza es la productividad. Tenemos una productividad agrícola demasiado baja. Y en la economía campesina esa productividad es desastrosa. Y parte de esa baja productividad son las pequeñas parcelas de terreno. Incluso, con el sistema capitalista, si tenemos una producción de 2000 hectáreas y una sociedad anónima con 200 accionistas en buena hora: se está democratizando en algo la propiedad de esa tierra. Esto es que no entienden muchos compañeros. Por ahí veo proyectos de tierra, incluso del propio Consejo de Soberanía Alimentaria, que tienen solo esa visión de justicia. Cuidado, por buscar la “justicia”, entre comillas, destrozamos la eficiencia y lo que hacemos es a todos igualitos, pero igualmente miserables, igualmente pobres (Correa, 2011)¹⁷.

En síntesis, los primeros dos años de Revolución Ciudadana consistieron en políticas agrarias convencionales; los siguientes dos años consistieron en plantearse una política agraria redistributiva como elemento clave para el cambio en el modelo de acumulación, pero no avanzar un solo milímetro en la ejecución de las muy moderadas medidas diseñadas para concretarla en la vida real. Muy al contrario, la redistribución aparece en su concepción como contraria al objetivo de aumentar la producción.

17 Comparecencia en la cadena radial del día sábado 8 de noviembre de 2011, consultado en: <http://www.youtube.com/watch?v=drjw8TogiOM>. Para una crítica a las declaraciones del presidente Correa desde una perspectiva que revaloriza el papel de la pequeña producción agropecuaria en los procesos de desarrollo de los países del sudeste asiático, y en varias regiones de América Latina y del propio Ecuador, ver Berry y North, 2011.

6. Desectorización

El quinto factor de distanciamiento entre las organizaciones indígenas y el gobierno es su concepción del Estado y de la participación social en la toma de decisiones sobre política pública. Como se mencionó, el proyecto de Revolución Ciudadana en Ecuador, incluye el componente de desectorización de la sociedad, es decir, la meta de abolir las estratificaciones sociales configuradas en clivajes étnicos, religiosos, de género etc., y, en cambio, valorar a todos como ciudadanos¹⁸. Este factor de desencuentro reconecta directamente al primer punto sobre el dilema intercultural del movimiento indígena. En opinión de un segmento del movimiento indígena, esta meta de PAIS de “ciudadanización” de la Revolución Ciudadana podría chocar con lo que dice el primer artículo de la nueva Constitución Ecuatoriana del 2008, donde se define al Ecuador como un Estado intercultural y plurinacional, es decir, un reconocimiento explícito a las reivindicaciones indígenas. Desde la visión de una corriente fuerte en el movimiento indígena, la desectorización que impulsa la Revolución Ciudadana es una espada de doble filo, ya que políticamente Movimiento PAIS y el Presidente Correa necesitan de la representación indígena para alimentar una imagen de unidad intercultural y de legitimidad étnica. De hecho, una gran cantidad de dirigentes y militantes, que anteriormente estaban en *Pachakutik*, han participado en diferentes niveles y posiciones de PAIS (Lalander, 2010). Uno de los eslóganes centrales del gobierno de Movimiento PAIS-Correa ha sido “la Patria ya es de todos”¹⁹, pero esto choca con la interpretación que hacen varias de las

- 18 Los orígenes ideológicos liberales de esta idea son bastante transparentes. El discurso gubernamental no apela a la organización, sino a la persona individual que actúa en la política. Este “ciudadano” tiene o debe tener una visión universalista y de largo plazo de la gestión gubernamental y de sus propias responsabilidades. Las fuentes de esta postura no son solo las doctrinas liberales de la representación política, sino sobre todo el hecho político objetivo que con los difusos “ciudadanos” no hay que negociar un programa político mientras que con organizaciones sociales, la negociación se vuelve indispensable, compleja e incesante. Mantener la libertad de acción frente a organizaciones sociales exigentes fue y sigue siendo una norma de conducta política de Alianza PAIS.
- 19 Como respuesta a este mensaje, en una atmósfera de diferendos entre el gobierno y las organizaciones indígenas en 2009, Luis Maldonado escribió el documento “El país ya es de todos, menos de los indios” (Maldonado Ruiz, 2009).

facciones indígenas -y también analistas como quienes suscriben- de la declaración de Ecuador como un Estado plurinacional e intercultural en el primer artículo de la nueva Constitución (Lalander, 2010).

El discurso oficialista sobre la ciudadanización igualmente se refleja en la nueva Constitución. Hay más que 100 referencias a ciudadanía, poder ciudadano, entre otros, en la Constitución de 2008. Aún más, el concepto de participación ciudadana se menciona 38 veces (lo que se compara con seis referencias en la Constitución de Venezuela y cuatro en la de Bolivia). Por ejemplo, el artículo 95 de la Constitución Ecuatoriana de 2008 establece;

Las ciudadanas y ciudadanos, en forma individual y colectiva, participarán de manera protagónica en la toma de decisiones, planificación y gestión de los asuntos públicos, y en el control popular de las instituciones del Estado y la sociedad, y de sus representantes, en un proceso permanente de construcción del poder ciudadano. La participación se orientará por los principios de igualdad, autonomía, deliberación pública, respeto a la diferencia, control popular, solidaridad e interculturalidad. La participación de la ciudadanía en todos los asuntos de interés público es un derecho, que se ejercerá a través de los mecanismos de la democracia representativa, directa y comunitaria.

No obstante, en el Ecuador de Correa-PAIS se ha establecido un ente burocrático central para la participación – el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social– lo que conlleva el riesgo de desarrollarse en un escenario de participación ciudadana/colectiva controlada desde arriba. Asimismo, Marc Becker (2011) destaca que activistas radicales –incluso representantes de las organizaciones indígenas– reclaman que el nuevo esquema de participación popular prioriza proyectos liberales e individualistas y que marginaliza las oportunidades de participación colectiva y la construcción de un Estado plurinacional (Becker, 2011).

Como se indicó, no todos los indígenas están en la oposición. Hay algunos dirigentes que se mantienen más cercanos al gobierno, sin necesariamente apoyar la dessectorización y la ciudadanización. Un ejemplo es Carlos Viteri, importante intelectual y ex-dirigente de la Organización de Pueblos Indígenas de Pastaza, que actualmente forma parte del gobierno como Director Ejecutivo del Fondo de Ecodesarrollo de la Región

Amazónica. Asimismo, Pedro de la Cruz, Kichwa originario de Cotacachi y ex Presidente de la FENOCIN, es uno de los assembleístas nacionales más cercanos al Presidente dentro de PAIS. A nivel de alcaldías gobernadas por PAIS, pueden mencionarse los casos de Mario Conejo y Alberto Anrango, destacados luchadores indígenas con trayectorias en el socialismo ecuatoriano, quienes a partir de las elecciones de 2009 son alcaldes de Otavalo y Cotacachi, respectivamente²⁰. Otro de los casos importantes es el de Mariano Curicama, el primer alcalde indígena de Ecuador (en Guamote, 1992-2000), así como también ex-funcionario en el gobierno de Gustavo Noboa Bejarano (2000-2003) y actual Prefecto de la provincia de Chimborazo. Curicama, sin embargo, no considera su relación con AP y con Rafael Correa como una “alianza”:

Las alianzas, o sea, yo no llego por alianzas a la prefectura. Yo llego a la prefectura de nuevo esta vez por el apoyo de *Pachakutik*, por las organizaciones indígenas, campesinas y también la parte urbana (...). A mí me habían pedido que pongamos la lista 35 del Señor Presidente, porque son mis amigos, no porque sea alianza. Y lo mismo con la lista 34, porque es el actual alcalde de Riobamba. Él es del *Movimiento Municipalista*. Entonces nosotros llegamos por nuestro trabajo, por nuestra capacidad y porque tengo el apoyo mayoritario de Chimborazo. (...). Yo no debo agradecer a Alianza PAIS, sino al Señor Presidente de la República, porque él es amigo, amigo de los indígenas, y me ha apoyado mucho. Me apoyó con recursos económicos para que yo pudiera hacer mucha vialidad, asfaltos de vialidad, canales de riego, forestación, reforestación, o sea, muchas obras hicimos con recursos que apoyó el Señor Presidente (...). (Curicama, entrevistado por Lalander, Riobamba, 2 de julio del 2009).

Respecto al tema de la dessectorización, hay que decir que algunos dirigentes indígenas que colaboran con el gobierno de Rafael Correa, especialmente aquellos que provienen de la FENOCIN, no de la CONAIE, nie-

20 Mario Conejo fue electo alcalde de Otavalo por *Pachakutik* en el 2000 y reelecto en el 2004. En 2006 salió de *Pachakutik* y se formó un movimiento político cantonal (la Minga Intercultural) antes de concretarse la alianza con PAIS. Alberto Anrango fue co-fundador del movimiento indígena de la provincia Imbabura en los años 70 y de la organización campesina indígena de Cotacachi –la UNORCAC– vinculada históricamente al Partido Socialista Ecuatoriano-Frente Amplio de Izquierda/PSE-FADI (Lalander, 2010).

gan que las conquistas obtenidas por la CONAIE en el período ubicado entre 1995 y 2007 de instituciones estatales autónomas manejadas por las organizaciones indígenas sean avances hacia el Estado Plurinacional. Germán Flores -indígena cotacacheño que en la actualidad es gerente regional del Ministerio de Producción, Empleo y Competitividad- es uno de ellos. En palabras de Flores:

¿Ahora qué es lo que sucede en estos momentos en donde el Presidente ha cogido todos los postulados del movimiento indígena y comienza a aplicarlos? También se quedan sin discurso, porque no es posible generar o comenzar a construir un estado plurinacional generando instituciones paralelas, donde tú comienzas a defender la educación bilingüe, donde comienzas a defender la salud intercultural, donde comienzas a defender al CODENPE, donde comienzas a defender una serie de situaciones, que sí es cierto, estaban construidas como parte de un proceso de inclusión [para superar] la exclusión que nosotros vivimos; pero, que en este nuevo gobierno comienza con una Revolución Ciudadana, se incluyen todos estos aspectos y esto va a licuar todo el estado y reorganizar el estado, reestructurar todo el Estado. Eso implica, nuevos procesos de construcción del Estado plurinacional y esto implica en educación cambiar el pensum de estudios pertinentes, social y culturalmente, de acuerdo a la realidad nacional (Flores, entrevistado por Lalan-der, Ibarra, 14 de diciembre, 2009).

Flores recoge la argumentación gubernamental según la cual las “instituciones paralelas”, es decir, instituciones estatales con autonomía, manejadas por las organizaciones indígenas, no son avances hacia un Estado Plurinacional. Aunque Flores habla de “licuar todo el estado”, no especifica la forma institucional que tendría esta nueva construcción del Estado plurinacional. Varias decisiones gubernamentales respecto al manejo de las instituciones dedicadas a temas indígenas aclaran cómo entiende la revolución ciudadana la construcción de la plurinacionalidad.

En febrero de 2009, mediante decreto ejecutivo 1585, el gobierno ecuatoriano suprimió la autonomía política de que gozaba la Dirección Nacional de Educación Bilingüe (DINEIB). Este decreto atribuyó al Ministro de Educación no solo la definición de toda la política educativa, sino la autoridad para nombrar al subsecretario de diálogo intercultural, al director nacional de la DINEIB y a sus directores provinciales. Además, el

Ministro emitirá el Acuerdo que define la composición del “Consejo Asesor” en educación bilingüe. Finalmente, el Ministro emitirá el Acuerdo que definirá la competencia de todos ellos. Estas atribuciones estaban, antes del decreto, en manos de las organizaciones indígenas. También fue suprimida la mayoría que las organizaciones tenían en el directorio del Consejo de Desarrollo de las Nacionalidades y Pueblos, CODENPE, donde ahora existe una mayoría gubernamental (paridad y voto dirimente para el gobierno), tal como reza la nueva Constitución (artículos 156 y 157)²¹. Cuando a fines de marzo de 2008 el Presidente Correa recibió en Quito a una marcha de la Federación de Organizaciones Campesinas Indígenas y Negras del Ecuador (FENOCIN) y de la Federación de Indígenas Evangélicos (FEINE), se refirió a la demanda de la CONAIE de un Estado plurinacional:

[No se permitirá que] sectores radicales que quieren defender su poder. Que buscan entender a la plurinacionalidad como una alianza de territorios en donde tengan su sistema de justicia, salud y educación, en la que pretenden mandar ellos y no el legítimo gobierno del Estado ecuatoriano. Eso no podemos aceptar compatriotas... (Presidencia de la República, 2008).²²

En breves palabras, las formas de gobierno propias de los pueblos indígenas, disponer de grados importantes de autogobierno en sus territorios y de autonomía en las instituciones estatales que definen las políticas hacia esos pueblos, no son, para la Revolución Ciudadana, la forma apropiada de entender la plurinacionalidad. El Presidente aludió a que las demandas de autonomías territoriales indígenas eran similares a las autonomías reclamadas por la derecha política guayaquileña, de la misma forma que en el discurso de posesión identificó la representación de todo tipo de organizaciones privadas en los consejos estatales encargados de la definición de políticas públicas con la privatización del Estado. ¿Sobre qué base institucional debe entonces construirse la plurinaciona-

21 Estos artículos afectan también la conformación de los órganos directivos del Consejo Nacional de las Mujeres, del Consejo de la Niñez y la Adolescencia y del Consejo de Discapacidades, donde las organizaciones civiles pierden la mayoría que tenían.

22 El artículo “Las organizaciones indígenas y campesinas respaldan la gestión del Presidente Rafael Correa”, 27 de marzo de 2008, Presidencia de la República del Ecuador, accesible en: <http://www.presidencia.gob.ec/noticias>.

lidad según el gobierno ciudadano? En lugar de instituciones paralelas de los indígenas, el modelo institucional que las reemplaza establece claramente que la plurinacionalidad se construye a partir de la recuperación de toda la autoridad estatal en manos del Presidente de la República, única persona cuya legitimidad democrática proviene de haber sido elegido por todos los ciudadanos y ciudadanas del país. Aunque hay ecos ideológicos de un liberalismo clásico en el proyecto de Estado, es decir, anterior al multiculturalismo del estilo de Will Kymlicka (1996). Lo esencial aquí es un problema de poder: el Presidente no está dispuesto a ceder poder ante ninguna organización indígena en el Estado central. Se entiende entonces por qué hay una contradicción y alejamiento sensible entre las organizaciones indígenas y el gobierno de Rafael Correa.

Como corolario de este distanciamiento político, durante la ceremonia de entrega del Proyecto de nueva Constitución al ejecutivo el 26 de julio de 2008, en su discurso al país, el Presidente Correa expresó:

Paradójicamente los principales peligros no han venido de una oposición que ni siquiera se cree a sí misma, sino de nuestras propias contradicciones, de esas agendas propias que se metieron por las trasteras, de un falso sentido de democracia que buscó los aplausos de los grupos que precisamente debíamos combatir, de Caballos de Troya que llevaban en su vientre aspiraciones y hasta frustraciones por las que no había votado el pueblo ecuatoriano (...). Lo dije el 29 de Noviembre del 2007, en la inauguración de esta Asamblea: el mayor peligro para nuestro proyecto de país es el izquierdismo y el ecologismo infantil. Temo que no me equivoqué, aunque tal vez me faltó añadir el indigenismo infantil (Correa, 2008a).

A pesar de la participación individual en PAIS por parte de algunos dirigentes indígenas, el conjunto de la organización indígena se ha pronunciado en contra del gobierno. Un hecho revelador es que en el Congreso de la CONAIE realizado en la ciudad de Puyo en mayo de 2011, que debía elegir al nuevo presidente de la organización, se presentaron tres candidatos, ninguno de los cuales se pronunció a favor del gobierno. De hecho, los tres candidatos, Auki Tituaña, de Imbabura, Humberto Cholango, de Cayambe, y José Acacho, de la Amazonía sur, competían unos con otros sobre cuál tenía el discurso más radical en contra del gobierno.

Por supuesto, como se mencionó anteriormente, hay organizaciones sociales en alianza con PAIS –como la FENOCIN y la organización campesina de la costa, la FENACLE– que hasta cierto grado perciben que son considerados como socios organizativos del proyecto oficialista. En cuanto a la complicación relacionada al establecimiento de diálogo y alianzas con otros sectores, es importante enfatizar, sin embargo, que hay consciencia sobre esta problemática dentro de Alianza PAIS. Como sugieren los politólogos Virgilio Hernández y Fernando Buendía (los dos ex *Pachakutik* y en la actualidad de PAIS):

[Alianza PAIS] tendría que recomponer su política de alianzas con los distintos sectores de la sociedad, en particular con los movimientos indígena, campesino, obrero y con los grupos sociales que demandan reconocimiento, mayor participación e interacción, rompiendo la lógica de “aliado o adversario” (Hernández y Buendía, 2011: 142).

Pero, las distancias parecen ya demasiado grandes para que este llamado a recomponer la política de alianzas parezca viable. En efecto, con motivo de la consulta popular convocada por el gobierno de la revolución ciudadana respecto a reformas constitucionales en temas de seguridad y reestructuración de la justicia, en mayo de 2011, se formó un colectivo electoral que promovió el voto por el “No” y que agrupó a la mayoría de grupos de izquierdas, llamado Coordinadora Plurinacional “Esta Vez No”. En agosto, este colectivo publicó un manifiesto por la unidad y la acción permanente de las izquierdas que actualmente están en la oposición. Este nuevo polo político a la izquierda del gobierno está conformado por el *Movimiento Popular Democrático* (MPD), *Pachakutik*, *Montecristi Vive* (un grupo de ex assembleístas constituyentes de Alianza PAIS liderados por Alberto Acosta), la Corriente Socialista Revolucionaria (una disidencia del Partido Socialista Ecuatoriano, todavía aliado al gobierno) y el movimiento Participación (el grupo político del ex Ministro de gobierno de Rafael Correa, Gustavo Larrea). Al mismo tiempo, la mayoría de las centrales sindicales molestas con la aprobación de un decreto que instaura la renuncia obligatoria de funcionarios públicos, la CONAIE y las organizaciones del Frente Popular (entre las más grandes, la Federación Única Nacional del Seguro Social Campesino - FEUNASSC y la Unión Nacional de Educadores - UNE), firmaron el 9 de agosto en Quito un acuerdo para coordinar su resistencia frente a las políticas de criminalización de

la protesta social y de promoción de políticas económicas extractivistas. La ruptura política entre el movimiento indígena y las principales organizaciones sociales del país con el gobierno ciudadano terminó entonces de consumarse.

Conclusiones

La histórica relación entre la izquierda política y el movimiento indígena ecuatoriano auguraba que la llegada a escena de Rafael Correa y Alianza PAIS se saldaría con una alianza mutuamente beneficiosa. También hubo muchas posibilidades de que esa alianza se consolidara porque los ejes programáticos, forjados en una lucha prolongada en contra de las políticas de ajuste neoliberal, eran inicialmente muy parecidos. La alianza, sin embargo, no fue posible. En el proceso electoral del 2006, el grueso de la estructura organizativa de la CONAIE y de *Pachakutik* apoyó a su principal dirigente del momento, Luis Macas, en la primera vuelta electoral. Luego, en la segunda ronda electoral e igualmente en el referéndum sobre la nueva constitución, las organizaciones indígenas en su mayoría apoyaron (críticamente) a la opción de PAIS-Correa. Al mismo tiempo, algunas organizaciones indígenas no pertenecientes a la CONAIE como la FENOCIN y algunos dirigentes locales y algunas figuras nacionales del movimiento, decidieron sumarse al Movimiento PAIS.

Sin embargo, como se ha retratado en el presente estudio, los distanciamientos programáticos y políticos entre la CONAIE y PAIS no han cesado de profundizarse, especialmente luego de la aprobación de la Constitución en octubre de 2008. Podría postularse que el momento de mayor convergencia entre las dos fuerzas sociales y políticas ocurrió precisamente durante el proceso constituyente. Se sostiene que tal distanciamiento tiene que ver esencialmente con diferencias programáticas que se acentuaron una vez que había que convertir la oposición al neoliberalismo en un programa positivo de gobierno. Esto quiere decir que la CONAIE y Movimiento PAIS se distanciaron porque el programa político de acciones gubernamentales que ambos imaginaron y construyeron para la superación del neoliberalismo era en realidad distinto. Algunas de estas diferencias programáticas tienen raíces en diferentes tradiciones ideológicas, como las que sustentan distintos modelos de Estado, esto es, por un lado, el modelo de la representación liberal, y, por otro, el

de las múltiples formas de democracia plurinacional. Muchas veces estas diferencias programáticas se entrelazaron con consideraciones y conflictos de poder e influencia en el escenario político. Cada actor buscaba mantener su influencia sobre sus propios seguidores, preservar su integridad organizativa o guardar su libertad de maniobra. Pero el corazón de las diferencias políticas que explica en última instancia el distanciamiento entre la CONAIE y Alianza PAIS, reside en distintas propuestas programáticas de cambio social.

Se proponen cinco factores fundamentales e interconectados para comprender mejor el distanciamiento entre los protagonistas del estudio. En primer lugar, se considera el dilema intercultural del movimiento indígena y los desafíos asociados a la cultura organizativa y las lógicas en la política de alianzas. En segundo lugar, se destaca el tema de la oposición al extractivismo, en este sentido, el gobierno entiende que la promoción de la minería metálica a gran escala es una de las estrategias fundamentales para afrontar el reto de una economía post-petrolera. La CONAIE, por el contrario, se opone a esta estrategia porque la concibe como una prolongación de la economía petrolera y por el peso que le atribuye a los impactos ambientales y sociales que la gran minería tendrá en zonas campesinas y de pequeña minería. En tercer lugar, el tema de la movilización social. El gobierno juzga que la movilización social en las calles y en las carreteras es una forma de anarquía y de presión indebida sobre la autoridad. La CONAIE, por el contrario, interpreta la movilización social como un componente fundamental de la participación ciudadana y de la democracia participativa. En cuarto lugar, se presentó el panorama de los diferendos en la política agraria. El gobierno reconoce la necesidad de una política agraria que ponga el acento en la redistribución de tierras y aguas y en la promoción de la pequeña y mediana producción parcelaria, pero sus programas han mantenido una orientación convencional hacia la agricultura comercial de grandes productores y prácticamente no ha iniciado la redistribución anunciada. La CONAIE, en cambio, arguye que a pesar de los conflictos y las complicaciones que implica una política de redistribución, es necesario avanzar decididamente en ellas si se quiere resolver el problema de la pobreza rural y de las bases para un desarrollo económico equitativo. En quinto lugar, se resalta la importancia del concepto de la *dessectorización* de la Revolución Ciudadana, que inclusive tiene repercusiones en la comprensión de las reivindicaciones in-

dígenas de la plurinacionalidad. El gobierno entiende que el fortalecimiento del Estado consiste en recuperar para el ejecutivo la autoridad sobre todas las decisiones relevantes de política pública. La CONAIE opina que el fortalecimiento del Estado debe ir de la mano con una democratización de la toma de decisiones mediante la participación directa de organizaciones civiles en espacios colegiados de definición de la política pública. Para el gobierno eso significa sectorizar o corporativizar el Estado. Asimismo, se ofreció una problematización analítica de las relaciones entre los actores indígenas y el movimiento político de Correa, como algunas contradicciones internas en la interpretación por parte de los dirigentes indígenas sobre el tema de alianzas interculturales.

La experiencia política de este desencuentro político y programático, al acentuar el faccionalismo interno de la CONAIE, tiende a reforzar las tradiciones de descentralización y autonomía de las organizaciones indígenas locales y de sus dirigentes. De acuerdo a sus condiciones, lecturas y negociaciones particulares, cada una de esas organizaciones y cada uno de esos dirigentes, establece alianzas y toma decisiones políticas sobre la relación con el gobierno. Esto no es nada nuevo, la descentralización y autonomía local de las organizaciones de la CONAIE son características organizativas desde sus primeros años; pero ante un gobierno más fuerte que la mayoría de gobiernos anteriores, esto se hace más extendido. Sin embargo, el grueso de las organizaciones se aleja cada vez más del gobierno de la Revolución Ciudadana. La negativa gubernamental a negociar su programa de gobierno con los movimientos sociales organizados sigue siendo el principal obstáculo a cualquier acuerdo duradero.

Referencias bibliográficas

- ACCIÓN ECOLÓGICA, CEDHU e INREDH. 2011. Criminalización a Defensores de Derechos Humanos y de la Naturaleza en Ecuador. En: Cecilia Chérrez, César Padilla, Sender Otten y María Rosa Yumbra (eds.). Cuando tiemblan los derechos: extractivismo y criminalización en América Latina. Observatorio de Conflictos Mineros de América Latina (OCMAL). Acción Ecológica y Broederlijk Denle. Quito, Ecuador.
- ACOSTA, Alberto. 2011. El uso de la justicia como mecanismo de terror. El Universo. 8 de febrero. En: <http://www.eluniverso.com/2011/02/08/1/1363/uso-justicia-como-mecanismo-terror.html>. Fecha de consulta: 30 de septiembre de 2011.

- BARRERA, Augusto. 2001. Acción colectiva y crisis política. El movimiento indígena ecuatoriano en la década de los noventa. OSAL / CLACSO. Centro de Investigaciones Ciudad y Abya-Yala. Quito, Ecuador.
- BAUD, Michiel. 2007. Indigenous Politics and the State. The Andean Highlands in the Nineteenth and Twentieth Centuries. En *Social Analysis*. Volumen 51. No. 2. Pp. 19-42.
- BECKER, Marc. 2011. ¡Pachakutik! Indigenous Movements and Electoral Politics in Ecuador. Rowman & Littlefield Publishers, Inc. Plymouth.
- BECKER, Marc. 2008. Indians and Leftists in the Making of Ecuador's Modern Indigenous Movement, Duke University Press. Durham y Londres.
- BERRY, Albert y NORTH, Liisa. 2011. Los beneficios de la pequeña propiedad en el campo. Respuesta al Presidente Correa. La Línea de Fuego. En: <http://lali-neadefuego.info/2011/10/24/los-beneficios-de-la-pequena-propiedad-en-el-campo-por-albert-berry-y-liisa-north/>. Fecha de consulta: 18 de noviembre de 2011.
- BUSTAMANTE, Fernando. 2006. Sociedad civil y partidos: más allá del corporativismo. En: *Entre Voces*. Revista del Grupo Democracia y Desarrollo Local. No. 5. Quito, Ecuador. Pp. 25-30.
- CEDHU y ACCIÓN ECOLÓGICA. 2010. Criminalización a defensores de derechos humanos y de la naturaleza, 2008-2010. Inédito. Quito, Ecuador.
- CORREA, Rafael. 2011. Cadena radial. 8 de noviembre de 2011. En: <http://www.youtube.com/watch?v=drjw8TogiOM>. Fecha de consulta: 18 de noviembre de 2011.
- CORREA, Rafael. 2010. "Lo que nos falta por hacer, es mucho más de lo que ya hemos hecho". Informe del Presidente a la Nación. Salón Plenario de la Asamblea Nacional. 10 de Agosto de 2010. Quito, Ecuador.
- CORREA, Rafael. 2008a. "Los que vinieron con agendas propias se equivocaron". Discurso de Rafael Correa ante la Asamblea Nacional Constituyente. Montecristi, Ecuador. 26 de julio de 2008. En: <http://www.presidencia.gob.ec>. Fecha de consulta: 30 de septiembre de 2011.
- CORREA, Rafael. 2008b. Cadena radial. Emisora Zaruma. 26 de abril de 2008. En: <http://www.presidencia.gob.ec/>. Fecha de consulta: 30 de septiembre de 2011.
- CORREA, Rafael. 2007. Discurso del Presidente de la República en la ceremonia de inauguración de la Asamblea Nacional Constituyente. Montecristi, Ecuador. 30 de noviembre de 2007.
- DO ALTO, Hervé. 2007. "El MAS-ISP boliviano, entre la protesta callejera y la política institucional". En: Karin Monasterios, Pablo Stefanoni y Hervé Do Alto

- (eds.). Reinventando la nación en Bolivia. Movimientos sociales, Estados y poscolonialidad. CLACSO/Plural editores. La Paz, Bolivia.
- EL UNIVERSO (varios años). En: <http://www.eluniverso.com>. Fecha de consulta: 30 de septiembre de 2011.
- GUERRERO, Andrés. 2010. Administración de poblaciones, ventriloquia y transescritura. Análisis históricos: estudios teóricos. FLACSO-Ecuador. Instituto de Estudios Peruanos. Lima, Perú.
- GUERRERO CAZAR, Fernando y OSPINA PERALTA, Pablo. 2003. El poder de la comunidad. Movimiento indígena y ajuste estructural en los andes ecuatorianos. CLACSO. Buenos Aires, Argentina.
- HARNECKER, Marta. 2011. Ecuador: una nueva izquierda en busca de la vida en plenitud. El viejo topo. Madrid, España.
- HARNECKER, Marta. 2010. Gobierno de Rafael Correa. Innovación, eficiencia y credibilidad. Entrevista de Marta Harnecker al Canciller Ricardo Patiño. En: <http://alainet.org/active/39980>. Fecha de consulta: 18 de noviembre de 2011.
- HERNÁNDEZ, Virgilio y BUENDÍA, Fernando. 2011. "Ecuador: avances y desafíos de Alianza PAIS". En: Nueva Sociedad. Julio-agosto. No 234. Pp. 129-142.
- KYMLICKA, Will. 1996. Ciudadanía multicultural. Paidós. Barcelona, España.
- LALANDER, Rickard. 2010. Retorno de los Runakuna. Cotacachi y Otavalo. Abya-Yala. Quito, Ecuador.
- LANDÍVAR, Natalia y YULÁN, Milton. 2011. Monitoreo de políticas de redistribución de tierra estatal y el derecho a la alimentación de posesionarios. Informe 2010. FIAN – Tierra y Vida (CEDOCUT). Quito, Ecuador.
- LARREA, Gustavo. 2009. Revolución Ciudadana. Planeta. Quito, Ecuador.
- LEÓN, Jorge. 2001. "El contexto y el sistema político en el movimiento indígena ecuatoriano". Manuscrito. CEDIME. Quito, Ecuador. En: <http://www.nativeweb.org/indiconf2001/leon.html>. Fecha de consulta: 30 de septiembre de 2011.
- MALDONADO RUIZ, Luis E. 2009. "El país ya es de todos, menos de los Indios". En: Boletín digital ILAWI. Escuela de Gobierno y Políticas Públicas para las Nacionalidades y Pueblos del Ecuador/ESGOPP. Quito, Ecuador.
- OSPINA PERALTA, Pablo. 2009. "Transiciones. Ecuador después del referéndum". CEP. Febrero. Quito, Ecuador. En: http://www.cepecuador.org/document/coyuntura_febrero%202009.pdf. Fecha de consulta: 18 de noviembre de 2011.
- OSPINA PERALTA, Pablo. 2008. "Ecuador: al ritmo de la iniciativa política del gobierno de la Revolución Ciudadana". CEP. Agosto. Quito, Ecuador. En:

- http://www.cepecuador.org/document/coyuntura_agosto2008.pdf. Fecha de consulta: 18 de noviembre de 2011.
- PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR. 2008. En: <http://www.presidencia.gob.ec>. Fecha de consulta: 30 de septiembre de 2011.
- REPÚBLICA DE BOLIVIA. 2009. Constitución Política del Estado de Bolivia. Asamblea Constituyente. La Paz, Bolivia. 7 de febrero de 2009.
- REPÚBLICA DEL ECUADOR. 2008. Constitución de la República del Ecuador. Asamblea Constituyente. Montecristi, Ecuador. Registro Oficial 20 de octubre de 2008.
- RICE, Roberta. 2011. "From the ground up: The challenge of indigenous party consolidation in Latin America". En: Party Politics. Marzo. Volumen. 17. No. 2. Pp. 171-188.
- SENPLADES (Secretaría Nacional de Planificación y Desarrollo). 2009. Plan Nacional para el Buen Vivir 2009 – 2013: Construyendo un Estado Plurinacional e Intercultural. SENPLADES. Quito, Ecuador.
- VAN COTT, Donna Lee. 2008. Radical Democracy in the Andes. Cambridge University Press.
- VAN COTT, Donna Lee. 2007. "Indigenous Peoples and the Left in Latin America: Diverse Forms of Linkage, Diverse Implications". Ponencia en el Simposio Left Turn in Latin America. University of British Columbia/Simon Fraser University. Vancouver, British Columbia.
- VAN COTT, Donna Lee. 2005. From Movements to Parties in Latin America. Cambridge University Press.
- VELASCO, Fernando. 1979. Reforma Agraria y Movimiento Campesino Indígena de la Sierra. Hipótesis para una investigación. El Conejo. Quito, Ecuador.
- YASHAR, Deborah J. 2005. Contesting Citizenship in Latin America: the Rise of Indigenous Movements and the Postliberal Challenge. Cambridge University Press.
- ZAMOSC, Leon. 2007. "The Indian Movement and Political Democracy in Ecuador". En: Latin American Politics & Society. Volumen. 49. No. 3. Pp. 1-34.

Entrevistas

- CHUJI, Mónica. 30 de junio, 2009. Quito.
- CURICAMA, Mariano. 2 de julio, 2009. Riobamba.
- FLORES, Germán. 14 de diciembre, 2009. Ibarra.
- MALDONADO, Luís. 7 de julio 2007. Ibarra.
- SANTI, Marlon. 2 de julio, 2009. Riobamba.